



Tácticas sucias detrás de los negocios 'verdes'

Boletín del WRM 274

Abril 2025

[Acceda al boletín en el sitio web](#)

[SUBSCRÍBETE](#)

Tabla de Contenidos

NUESTRA OPINIÓN: Las comunidades se levantan contra el acaparamiento de tierras y la violencia del Estado.....	3
ONGs al servicio del saqueo de los territorios: el caso de la Fundación Earthworm....	6
El despojo de las plantaciones: las luchas comunitarias en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica.....	16
Degradar territorios antes que recuperarlos: Plantaciones para el mercado de carbono en la Orinoquía colombiana.....	20
Tailandia: ¡Las grandes centrales hidroeléctricas no son energía limpia! Las comunidades en lucha contra las represas intercambian experiencias y emiten una declaración conjunta.....	27
Declaración de Solidaritas Merauke, un llamado de emergencia desde Papúa: detener el Proyecto Estratégico Nacional de Merauke.....	31
DE LOS ARCHIVOS DEL BOLETÍN DEL WRM	
Para releer: Mega plantaciones de pino en la Patagonia argentina: invasión de tierras, incendios y escasez de agua.....	33
RECOMENDADOS	
“El peor fondo de conservación de todos los tiempos”.....	33
Las comunidades indígenas Marudi se oponen al proyecto de carbono de una empresa maderera en Sarawak (Malasia).....	34
Camerún: la lucha por sus tierras ancestrales continúa.....	34

NUESTRA OPINIÓN

Las comunidades se levantan contra el acaparamiento de tierras y la violencia del Estado

En todo el Sur Global, las comunidades que oponen resistencia a que las grandes empresas controlen sus territorios no sólo se enfrentan a la violencia empresarial, sino a gases lacrimógenos, golpes y represión estatal. Poniendo en cuestión la interpretación errónea y codiciosa de que “toda la tierra le pertenece al Estado”, esgrimida por los gobiernos para proteger los intereses de las grandes empresas, las comunidades se mantienen firmes en la lucha por recuperar sus tierras ancestrales “porque es un lugar sagrado, es un lugar que le da sentido a nuestra existencia”.

Esta editorial trata sobre la valentía y determinación de las comunidades que se movilizan para denunciar y oponer resistencia al control corporativo sobre las tierras comunitarias. A menudo, las comunidades no sólo enfrentan la violencia y control que ejercen las grandes empresas sobre sus tierras, sino también los gases lacrimógenos, golpes y la represión estatal. Esto se desencadena por gobiernos que recurren a una “interpretación errónea y codiciosa” de la constitución de la mayoría de los países africanos de que “toda la tierra le pertenece al Estado” para proteger así los intereses empresariales. (1)

Eso es lo que ha estado sucediendo en la Región del Litoral de Camerún, donde la comunidad de Apouh à Ngog se opone a que Socapalm, subsidiaria camerunesa de la tristemente célebre multinacional Socfin, vuelva a instalar plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras ancestrales. Durante casi 50 años, las actividades de la empresa le han hecho la vida miserable a la comunidad de Apouh à Ngog, cuya aldea fue erradicada de su ubicación original hace décadas por las plantaciones industriales de palma aceitera.

Al sustituir secciones de las antiguas plantaciones de palma aceitera, Socapalm no solamente hace caso omiso a los pedidos de la comunidad para que retrocedan de los espacios vitales inmediatamente contiguos a la aldea –las nuevas plantaciones de la empresa se están adentrando aun cada vez más al perímetro de la aldea. “Si no frenan estas acciones, las mujeres que vivimos cerca de Socapalm en Edéa tendremos que padecer otros 50 años de sufrimiento, abusos, violaciones, robos, hambre, frustración y violación de nuestros derechos, privacidad y dignidad”. Así lo explica la Asociación de Mujeres Vecinas de SOCAPALM Edéa (**AFRISE**) en una petición que reclama que se ponga fin a esta ocupación de los espacios vitales de la aldea por la empresa Socapalm, certificada por la RSPO. (2)

En enero de 2025, las mujeres de AFRISE sembraron plantas de banano en 35 hectáreas de tierras en disputa que Socapalm estaba preparando para replantar con palma aceitera. La empresa fumigó las plantas de banano con sustancias químicas poco tiempo después y el 24 de marzo regresó escoltada por decenas de militares armados para continuar replantando. A pesar del miedo y los gases lacrimógenos y golpes, la comunidad obstaculizó el paso de las excavadoras de la empresa e impidió durante varios días que se siguiera adelante con la replantación por parte de

la empresa. Como la empresa siguió adelante con sus plantaciones, más de 60 organizaciones exigieron el cese inmediato de la invasión por parte de la empresa de las tierras ancestrales de la comunidad. También instaron al gobierno de Camerún a garantizar el espacio vital de la comunidad de Apouh à Ngog, en lugar de enviar fuerzas militares armadas para proteger los intereses de Socfin, una empresa que es un claro ejemplo del patrón colonial de explotación de la región.

Es también lo que ha estado sucediendo en la municipalidad de Aracruz, en el estado brasileño de Espírito Santo, donde cerca de 1000 mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se movilizaron para exigir una reforma agraria y contra las múltiples formas de violencia ejercidas contra las mujeres. (3) Bajo la consigna “El agronegocio es violencia y crimen ambiental. La lucha de las mujeres es contra el capital”, ocuparon tierras controladas por la empresa Suzano, la mayor exportadora de pulpa de celulosa del mundo. Durante años, la empresa ha llevado adelante sus negocios con total impunidad, acumulando vastas extensiones de tierra fértil y perpetrando violaciones contra Pueblos Indígenas y comunidades quilombolas y de campesinas/os sin tierra. En un comunicado de prensa, el MST denuncia que “las multinacionales no se preocupan por obtener tierras para resolver el problema del hambre en el país”, y que sería posible asentar a más de 100.000 familias en las 2,7 millones de hectáreas de tierras fértiles de Brasil que se encuentran en manos de Suzano. En 2011, Suzano se comprometió a ceder 22 zonas ocupadas por la empresa a asentamientos de campesinas/os sin tierra, pero la empresa no ha cumplido con sus compromisos.

Al igual que AFRISE en Apouh à Ngog, las mujeres que ocupan la tierra en Aracruz asumen el compromiso de seguir luchando por la tierra para cultivar alimentos, ya que, como aquellas, ellas también se enfrentan a un Estado que se coloca del lado de la empresa, no del campesinado. (4)

Es también lo que ha estado sucediendo en Costa de Marfil, donde 20 integrantes de la comunidad indígena Winnin fueron arrestados en diciembre de 2024. La comunidad indígena Winnin han hecho público su rechazo a la privatización de sus tierras ancestrales en el bosque de Monogaga. (5) Los Winnin viven y dependen de estos bosques desde hace más de seis siglos. Sin embargo, el Ministerio de Agua y Bosques de Costa de Marfil otorgó una concesión a la Roots Wild Foundation, cuyas actividades ya han generado conflictos con las comunidades. Los arrestos y amenazas contra personas Winnin antes de su detención suscitan serias inquietudes acerca de la criminalización de las/os defensoras/es de la tierra en la región.

Es también lo que está ocurriendo en Indonesia, en Papúa y en toda la región del Mekong, como se puede leer en dos declaraciones que compartimos en esta edición del boletín. En Papúa, el Movimiento Solidaritas Merauke se organizó para compartir historias del sufrimiento colectivo y el trauma provocado por los crímenes estatales-empresariales, en especial los cometidos en nombre de lo que el gobierno de Indonesia denomina Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN). La declaración, elaborada conjuntamente por el Movimiento Solidaritas Merauke, destaca las luchas de la comunidad en contra del despojo de sus espacios de vida por estos megaproyectos estatales-empresariales que profanan lo que las comunidades consideran sagrado. En Tailandia, comunidades de la región del Mekong y comunidades Punan de Kalimantan del Norte en

Indonesia se reunieron para intercambiar y aprender sobre las luchas de las comunidades en contra de megaproyectos de represas hidroeléctricas. En una declaración con motivo del Día Internacional de Acción contra las Represas el 14 de marzo, reafirmaron la importancia de permanecer juntas para demostrar que “estamos unidas y firmes en la lucha colectiva para defender a nuestros ríos, bosques y futuros de falsas soluciones “verdes” y la codicia empresarial”.

En una entrevista con WRM en 2018, un líder del Pueblo Akroá-Gamela de Brasil explica por qué a pesar del temor a la represión estatal y la violencia de grandes empresas codiciosas, las comunidades se mantienen firmes en la lucha para recuperar sus tierras ancestrales: “porque es un lugar sagrado, es un lugar que le da sentido a nuestra existencia”. (6)

Porque la tierra le da sentido a su existencia, las comunidades se alzan contra la violencia empresarial y la interpretación gubernamental errónea y codiciosa de que “toda la tierra le pertenece al Estado”. En Apouh à Ngog, Aracruz y tantos otros lugares, las comunidades se están organizando para proteger y recuperar las tierras de sus ancestros/os - ¡La lucha continúa!

Secretariado del WRM

- (1) Boletín 241 del WRM. 2018. [Una reflexión desde África: hay que vencer el miedo para construir movimientos más fuertes.](#)
- (2) Petición. Camerún: [Testimonios de mujeres que reclaman su tierra.](#)
- (3) [Contra el capital y el patriarcado, las mujeres del MST realizan una jornada de lucha y ocupan las plantaciones de eucalipto de Suzano en Brasil.](#)
- (4) Brasil de Fato. 2025. [Justiça determina despejo de ocupação de mulheres do MST em área da Suzano no ES.](#)
- (5) Mongabay. 2025. [Des leaders communautaires emprisonnés après s'être opposés à la privatisation controversée d'une forêt classée en Côte d'Ivoire.](#)
- (6) Boletín 241 del WRM. 2018. [Brasil: Yo soy Kum'tum, soy del pueblo Akroá-Gamela.](#)

ONGs al servicio del saqueo de los territorios: el caso de la Fundación Earthworm

Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países. Vea el artículo y la entrevista a continuación.

Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.

Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.

¿Qué es la Fundación Earthworm?

Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países. (1)

Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía” (2). Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. (3) Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.

Las empresas y la Fundación Earthworm

En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista (4). En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.

Empresas que apoyaron a la Fundación Earthworm en 2023	
Sector	
Agronegocios	Bunge, Cargill, Wilmar, Asia Pulp & Paper, Louis Dreyfus Foundation, Olam, Veracel (Suzano y Stora Enso), Socfin, entre otros.
Industria de bienes de consumo y gigantes minoristas	Pepsico, Nestlé, Danone, Mars, L'Oréal, Colgate-Palmolive, McDonald's, Fundación Wal-Mart, 3M, entre otros.
Minería	Alcoa

De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023 (5).

En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. (6) Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?

¿Qué hace la Fundación Earthworm?

Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.

Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con

las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.

La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales

Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. (7) En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades. (8)

Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.

La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.

Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia

Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.

Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa. (9)

En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se 'reconoce' que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.

En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros (10)-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.

Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.

Otro ejemplo nos llega desde Liberia. Tras 7 años de asociación, Socfin y Earthworm no consiguieron resolver los conflictos con las comunidades, lo que llevó a la empresa a vender una de sus plantaciones en el país en 2024. (12) Pero, ¿por qué, si se estaban ‘haciendo progresos’?

La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.

Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. (13) De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.

Earthworm y Agropalma en Brasil

Agropalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.

Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargill y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.”(14)

La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. (15) Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.

Voces desde los territorios

Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas.

De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.

WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?

ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de

suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma.

En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.

En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.

Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa. (16)

Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.

Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergía Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunity Agro y Dentauá S.A.).

SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.

Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de

las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.

Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.

Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos **cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.**

WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?

ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.

SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré].

Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.

WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?

SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con

Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe (17), incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.

El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes.

Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.

WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?

ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas.

Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.

WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?

ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.

WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?

SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.

Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.

Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades.

En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.

WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?

ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.

SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.

WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?

SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.

ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho

“divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.

Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.

Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva (18)

- (1) Información extraída de la página [web de la Fundación Earthworm](#)
- (2) Informe anual 2023 de la Fundación Earthworm.
- (3) Video [disponible acá](#).
- (4) Idem (2).
- (5) Información resumida de los informes anuales de la Fundación Earthworm.
- (6) Cita extraída de un video institucional disponible en [YouTube](#)
- (7) Consulta la cartilla elaborada por Informal Alliance Against Industrial Oil Palm Plantations in West and Central Africa, [disponible en inglés aquí](#).
- (8) Para más información, se puede consultar el [Boletín 224 del WRM](#), el artículo de GRAIN sobre cómo Socfin obtuvo concesiones de tierras para sus plantaciones en Camerún, [disponible aquí](#), y el [siguiente artículo de Mongabay](#).
- (9) Más concretamente, nos referimos a los siete informes publicados por Earthworm entre 2023 y 2025 sobre los conflictos entre las sucursales de Socfin y las comunidades locales de estos países. Se pueden consultar los informes [aquí](#).
- (10) Más información sobre el impacto de las plantaciones de Socfin en las comunidades en [Farmlandgrab](#), [Grain](#), y [WRM](#)
- (11) Los tres informes de Earthworm sobre la situación en Mbongo, Mbambou y Edéa, publicados en febrero de 2025, reconocen que la enmienda n° 1 del contrato de arrendamiento prevé la retrocesión de tierras por un total de más de 8.000 hectáreas. Los informes están disponibles [aquí](#).
- (12) Más información [aquí](#).
- (13) Lee más en el artículo <https://www.earthsight.org.uk/news/idm/socfin-under-scrutiny-alleged-abuses-africa-rubber-palm-oil-plantations-despite-pldeges>
- (14) Información obtenida [aquí](#).
- (15) Información obtenida del Registro de Reclamaciones de Proveedores de SDGI, disponible [aquí](#).
- (16) Consulta [aquí](#).
- (17) Consulta aquí el informe de Synaparcam [[en francés](#)]
- (18) Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonia e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonia.

El despojo de las plantaciones: las luchas comunitarias en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica

Las comunidades rurales de la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica, afectadas por el despojo histórico de tierras en muchos lugares, también sufren los múltiples impactos de vivir rodeadas de plantaciones industriales de árboles. En un intento por fortalecer su acceso a la tierra, estas comunidades se han movilizado en un foro apoyado por organizaciones de la sociedad civil, exigiendo participar en la toma de decisiones y en otros derechos comunitarios.

Introducción

El despojo de tierras en función de la “raza” –un legado histórico de Sudáfrica– ha traído aparejado que las comunidades africanas indígenas que viven en zonas de plantaciones de monocultivos de árboles y sus alrededores hayan sufrido desde hace largo tiempo marginación económica y una situación de desventaja social. A pesar de la transición de Sudáfrica a la democracia y el programa de reforma agraria, el legado del despojo de tierras continúa definiendo la pobreza rural y la desigualdad económica (1). Las comunidades de la provincia del Cabo Occidental no solo sufren este legado sino también la incertidumbre en torno a las nuevas iniciativas de forestación. Estas comunidades afectadas por las plantaciones industriales de árboles enfrentan una red de impactos interconectados como resultado de la distribución desigual de la tierra y los monocultivos: pobreza, inseguridad en la tenencia de la tierra, problemas ambientales y deficiencia en materia de gobernanza. Sin embargo, también demuestran resiliencia, que se expresa en respuestas colectivas y movilización frente a estas dificultades.

Comunidades forestales: despojo de antes y de ahora

El legado de despojo de tierras y desplazamiento en Sudáfrica es particularmente evidente entre las comunidades que viven en zonas de plantaciones industriales de árboles (conocidas en Sudáfrica como comunidades forestales). En el Cabo Occidental, desde principios de la década de 2000 las comunidades forestales sufrieron la privatización efectiva de las plantaciones estatales, seguida por un cambio de rumbo del Estado y la propuesta de replantar plantaciones de árboles para la obtención de celulosa, papel y madera para aserraderos. Sus experiencias ilustran algunas de las dinámicas ecológicas, económicas y políticas del modelo de plantaciones industriales. Si bien las amenazas a los derechos y a los medios de vida y sustento de las comunidades son comunes en todo el mundo, la evidencia en el Cabo Occidental revela cómo estos problemas se manifiestan de formas locales distintas y evolucionan con el tiempo.

Las plantaciones industriales y el contexto del Cabo Occidental

Sudáfrica es un país con una gran diversidad ecológica, que abarca desde la costa subtropical del este hasta la meseta central del interior, pasando por paisajes áridos y desérticos en el oeste. Sus bosques autóctonos templados son ricos en especies pero abarcan solo un porcentaje de un dígito

de la superficie terrestre del país. En Sudáfrica, las plantaciones de monocultivos de árboles suelen ser denominadas “bosques”, lo que durante mucho tiempo ha ocultado los múltiples impactos negativos causados por las plantaciones de monocultivos de árboles. Estas plantaciones de árboles se extienden en un arco fragmentado, desde la parte norte del país a lo largo de la costa este hasta la región de clima mediterráneo con lluvias invernales del Cabo Occidental.

El Cabo Occidental tiene una diferenciación climática e histórica. Desde mediados del siglo XVII, los descendientes de los colonos europeos han dominado la agricultura comercial en la región. Al igual que gran parte del país, el Cabo Occidental sufrió un despojo de tierras a gran escala durante la era colonial y la del apartheid, lo que restringió severamente el acceso a la tierra para las personas indígenas y “mestizas”. Hoy en día, la región es conocida por sus industrias de vino y frutales de hoja caduca orientadas a la exportación, mientras que su centro metropolitano de Ciudad del Cabo atrae al turismo mundial.

En las zonas montañosas del Cabo Occidental hay plantaciones comerciales dispersas, principalmente de especies no nativas como pinos, eucaliptos y acacias. En más de una docena de estas plantaciones, comunidades históricamente desfavorecidas viven en tierras de propiedad estatal, previamente arrendadas a empresas madereras privadas, como MTO (Mountain to Ocean). Las pequeñas zonas de bosque nativo de Sudáfrica están en gran parte deshabitadas. En cambio, son las comunidades que viven y trabajan en las plantaciones de monocultivos de árboles las que están a la vanguardia de las luchas autodenominadas “forestales” del país.

La vulnerabilidad y marginación de las comunidades forestales

Las comunidades que viven en las plantaciones industriales de árboles de Sudáfrica, en particular en el Cabo Occidental, viven en condiciones precarias y de inseguridad en materia de tenencia de la tierra. Estas comunidades tienen oportunidades económicas limitadas y carecen del acceso a servicios e infraestructura estatales básicos. El Estado y las empresas madereras niegan con frecuencia a las comunidades el acceso a las plantaciones circundantes para obtener leña, materiales de construcción y plantas medicinales. Como resultado, estas comunidades rurales están cada vez más desconectadas de los medios de vida tradicionales basados en la tierra, en especial la agricultura en pequeña escala, el pastoreo y la recolección de alimentos, lo que complica aún más su capacidad de autosustentarse. A pesar de casi tres décadas de reforma agraria en Sudáfrica, la pobreza y la inseguridad de la tenencia de la tierra continúan predominando.

Además, las comunidades que viven en estas plantaciones de árboles se enfrentan a las consecuencias a largo plazo, tanto actuales como emergentes, de vivir rodeadas de plantaciones:

- **Degradación ambiental**

La pobreza y la marginación económica se entrecruzan con las amenazas ambientales. Las plantaciones de monocultivos en toda Sudáfrica contribuyen al agotamiento del suelo, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. En el Cabo Occidental, las plantaciones de árboles son particularmente vulnerables a los incendios forestales, que se ven exacerbados por el clima

propenso a la sequía y la naturaleza insostenible de la plantación de monocultivos de árboles, especialmente en medio de patrones de cambio climático. Por ejemplo, en 2017, un incendio devastador arrasó la comunidad de Hawequa, en las afueras de la ciudad de Paarl. Durante una semana la comunidad evacuó sus hogares, mientras la plantación de pinos ardía, destruyendo casas y jardines.

• **Débil gobernanza y coordinación estatal**

Los esfuerzos por mejorar las condiciones de las comunidades dentro de estas plantaciones de árboles se han visto obstaculizados por una gobernanza débil y una mala coordinación dentro del Estado sudafricano. Esto ha paralizado los esfuerzos para formalizar los acuerdos de tenencia de la tierra y proporcionar servicios esenciales. Como estos asentamientos a menudo se extienden a ambos lados de los límites físicos y jurisdiccionales de varios organismos gubernamentales, se ven afectados negativamente por la mala coordinación dentro del Estado. Al igual que muchas comunidades forestales en todo el mundo, las del Cabo Occidental han sido excluidas con frecuencia de los procesos de toma de decisiones relacionados con el uso de la tierra, la gestión forestal y el establecimiento de nuevas plantaciones. Estas cuestiones también tienen una fuerte influencia de género, ya que el sector forestal comercial ha estado históricamente dominado por los hombres y los responsables de las políticas suelen subestimar los roles tradicionales de las mujeres (como la recolección de leña y plantas medicinales). Sin embargo, las mujeres desempeñan un papel importante dentro de estas comunidades al aportar en cuestiones comunitarias y espirituales.

• **La amenaza emergente de la forestación**

En el Cabo Occidental, el Estado se retiró del sector forestal hace dos décadas, pero revirtió esta decisión al cabo de una década en medio de la escasez posterior de madera para aserraderos. El Estado ha propuesto “reinstaurar” (es decir, restablecer) plantaciones de árboles mediante arrendamientos a empresas concesionarias privadas. Sin embargo, las comunidades forestales han sido excluidas de la toma de decisiones sobre este cambio de política. Los planes para una nueva forestación plantean preocupaciones sobre una nueva ola de despojo, marginación económica e inseguridad en materia de tenencia de la tierra. La replantación de monocultivos de árboles amenaza con desplazar aún más a las comunidades locales, socavar los potenciales medios de vida y cerrar las oportunidades de formas de agroforestería más sostenibles desde el punto de vista social y ambiental.

Respuestas y movilización comunitaria

Organizaciones de la sociedad civil como el Surplus People Project (SPP) han movilizado a las comunidades del Cabo Occidental. Con el apoyo del SPP, estas comunidades geográficamente dispersas formaron en 2011 el Foro Comunitario Forestal (FCF) para defender sus intereses colectivos. A finales de 2024, el FCF organizó una “Feria del conocimiento” para compartir experiencias, analizar sus luchas y planificar esfuerzos de defensa con el Estado y otras partes interesadas. Esta iniciativa destaca la necesidad de un enfoque integral para abordar el legado de marginación.

El enfoque es multifacético y aborda desafíos interconectados:

- **Mejores servicios e infraestructura**

Garantizar el acceso a servicios e infraestructura esenciales es crucial. La marginación a menudo conduce a una prestación de servicios inadecuada.

- **Fortalecimiento del acceso a la tierra**

Mejorar el acceso a la tierra y a la seguridad de la tenencia de la tierra es esencial para empoderar a las comunidades forestales para que gestionen sus tierras de manera sostenible e inviertan en prácticas agrícolas y agroforestales comunitarias a largo plazo

- **Desarrollo de capacidades y oportunidades económicas**

Desarrollar habilidades y mejorar las oportunidades de acceder a medios de vida sostenibles es clave para romper los ciclos de pobreza.

- **Prácticas agroforestales sostenibles**

Promover la agroforestería garantiza la salud a largo plazo tanto de la tierra como de la comunidad, equilibrando la conservación ecológica y la generación de ingresos.

- **Participación comunitaria en la toma de decisiones**

Aumentar la participación comunitaria en la gobernanza permite a las comunidades forestales influir en las políticas sobre el uso de la tierra, la gestión ambiental y la asignación de recursos.

En general, los miembros del FCF informan que ha logrado reunir a los organismos del Estado y a otros actores pertinentes para hacer frente a los problemas de la comunidad.

Esta estrategia aborda tanto las necesidades inmediatas como las desigualdades estructurales a largo plazo, empoderando a las comunidades para que tomen el control de su desarrollo y desafíen la marginación histórica. Los esfuerzos del FCF demuestran el potencial de las iniciativas impulsadas desde la base y por la comunidad para fomentar un cambio significativo y sostenible.

Surplus People Project

David Neves, Wade Parker .

(1) Pueden ver el artículo sobre el Foro Comunitario Forestal publicado en 2015 en el boletín del WRM (solo [inglés y francés](#))

Degradar territorios antes que recuperarlos: Plantaciones para el mercado de carbono en la Orinoquia colombiana

Varias empresas vienen ampliando las plantaciones de árboles en la Orinoquia colombiana, incrementando conflictos y violencia de larga data. “Esas empresas no son reforestadoras sino deforestadoras, porque han traído especies introducidas como el acacio, el eucalipto y el pino que no son del territorio, entonces están eliminando lo que es de aquí” - Líder indígena Sikuni

La Orinoquia hace referencia a los territorios abarcados por la inmensa cuenca del río Orinoco en Colombia y Venezuela. Existe una predominancia de terrenos planos, por lo cual es conocida como la región de los llanos. Constituye una de las zonas de sabanas más extensas del planeta, junto a otras como la africana o el cerrado en Brasil. En la parte colombiana, se concentra, mayoritariamente, en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, cubriendo unos 310.000 Km². (1)

En tan vasta extensión habitan pueblos indígenas originarios, campesinado, colonos, afrodescendientes y población urbana. Esta última ha crecido significativamente en las décadas recientes en ciudades como Villavicencio, capital del Meta, por razones como la llegada de población desplazada del resto de los llanos por el conflicto armado que aún afecta al país.

La Orinoquia ha sufrido drásticas transformaciones territoriales desde la época de la ocupación europea, con la que se introdujo la ganadería extensiva. Luego llegó el extractivismo, en esta región se explota el mayor volumen de petróleo en Colombia. Al inicio de los años 60 el Estado empujó hacia esta región a miles de familias, bajo programas de colonización dirigida; muchas de esas propiedades terminaron en manos de terratenientes, desplazando nuevamente a las familias.

Hacia la década de los 80, la economía de los cultivos de uso ilícito, principalmente coca, ocupaba grandes extensiones y el conflicto armado se recrudeció, siendo una de las regiones más afectadas. (2) Posteriormente, una nueva actividad económica, que se presenta como lícita, irrumpió para transformar e impactar nuevamente el territorio y a sus habitantes: las plantaciones de árboles a gran escala.

Plantaciones de árboles para el mercado de carbono

Las plantaciones o monocultivos de árboles tienen diversas características. Este artículo busca centrarse y advertir sobre los rasgos e impactos de un tipo particular: las plantaciones destinadas para el mercado de carbono.

No se trata de algo nuevo, son monocultivos que ya tuvieron una fase de implementación durante la primera década de este siglo, cuando se promocionaron como sumideros de carbono. En los

tres años recientes, la cantidad de solicitudes para establecer y registrar plantaciones de árboles, como proyectos de carbono, ha incrementado notoriamente, tanto en número de proyectos como en tamaño. (3)

¿Pero de dónde surge el interés por estas plantaciones? Básicamente de la oportunidad (para las empresas madereras y compañías de celulosa) de hacer un negocio adicional y ganar más dinero, además de lavar la imagen de muchas empresas que compran los “créditos de carbono” – o permisos para contaminar. (4) Se aprovecha el postulado que los árboles absorben carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus hojas, troncos y raíces. Entonces, quien crea plantaciones y afirme que solo está plantando por el estímulo ofrecido por el mercado de carbono, puede ganar dinero vendiendo créditos de carbono a empresas que dicen que no pueden reducir su propia contaminación. (5) Sin embargo, eso no suele ser cierto, entre otros porque quien hace las plantaciones, lo hará de todos modos para seguir vendiendo madera y ganando.

El mercado de carbono y sus proyectos no han funcionado para lo que prometen, es decir, solucionar la crisis climática, pero si funcionan muy bien para las empresas que se aprovechan del negocio y ofrecen sus servicios de consultoría, certificación, creación de estándares de carbono, comercialización de créditos, entre otros. Además, beneficia a las empresas, principales responsables de la crisis climática, que en lugar de cortar o reducir sus emisiones, las mantienen o incrementan, incrementando sus ganancias.

Una publicación de Amigos de la Tierra ofrece un extenso listado de impactos y actuaciones erradas de los responsables de proyectos de plantaciones relacionadas con la compensación de carbono. (6) Entre ellas:

- violación de leyes de diferentes países, relacionadas con el acceso a la tierra para las comunidades y el derecho a la consulta previa, libre e informada;
- expulsión de sus tierras de familias agricultoras;
- compra de tierras a muy bajo precio o acaparamiento violento de tierras.
- en el caso de proyectos donde agricultores firman contratos para plantar árboles, obligaciones más allá del tiempo estipulado en los contratos, por ejemplo, hacer mantenimiento de árboles plantados por 50 o 100 años, en el marco de contratos que solo duran siete años;
- afectaciones a la soberanía y seguridad alimentaria, pues las familias deben abandonar sus cultivos para dedicarse a las actividades de los proyectos;
- inclusive algunas empresas han generado incendios accidentales.

Estos hechos dan razones de sobra para generar alerta y preocupación entre las comunidades, especialmente del sur global, en donde más está creciendo este tipo de plantaciones. De forma particular preocupa lo que puede suceder en Colombia, que está entre los tres países con mayor número de proyectos de plantaciones de árboles para el mercado de carbono.

Plantaciones para el mercado de carbono en la Orinoquia

Dentro de Colombia, la Orinoquia concentra la mayor superficie ocupada por plantaciones de árboles destinadas al mercado de carbono. Son al menos 28 proyectos que se extienden por aproximadamente 178 mil hectáreas (7), cifra que incrementa al incluir proyectos aún no registrados. A pesar que otros lugares del país, como el departamento de Antioquia tienen mayor número de proyectos, estos ocupan una superficie mucho menor.

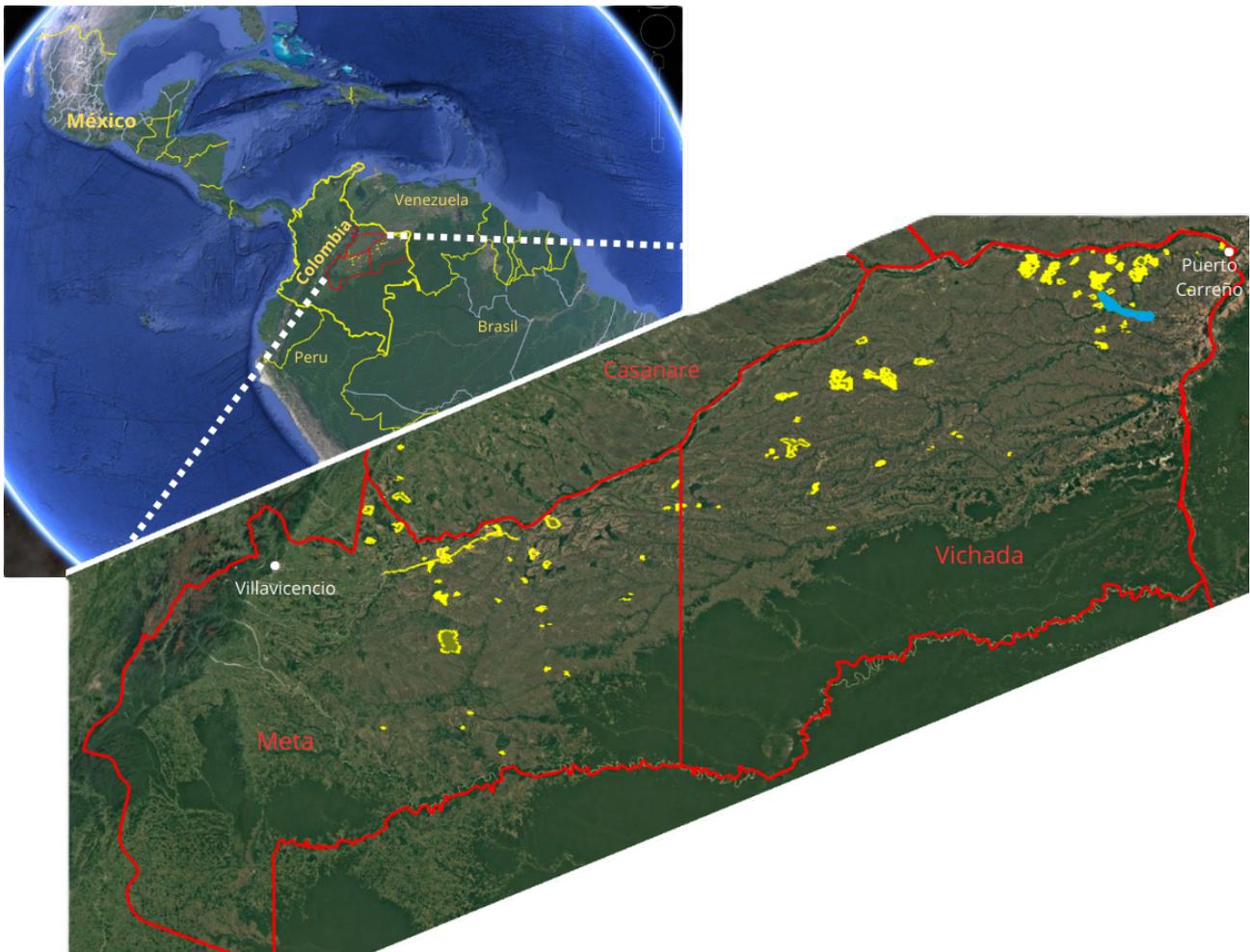


Figura 1: Mapa que muestra, en amarillo, dónde se concentran la mayoría de las plantaciones para el mercado de carbono en la Orinoquia colombiana.

Así pues, la Orinoquia, y particularmente los departamentos de Meta y Vichada, concentran la mayor superficie de plantaciones, y, por ende, la mayor cantidad de riesgos e impactos. Además, los antecedentes de las plantaciones ya existentes en la región son alarmantes. La Orinoquia es una de las regiones severamente afectadas por el conflicto armado en Colombia, con miles y miles de personas asesinadas, desplazadas, desaparecidas o violentadas en las formas más atroces. Parte de esos impactos y sufrimiento están directamente relacionados con el establecimiento de

plantaciones. A su vez, las plantaciones son una de las causas de la transformación del territorio y el paisaje.

¿Pero por qué son tan nefastas las plantaciones en la Orinoquia?

Gran parte de los proyectos propuestos o en desarrollo, plantean restauración o recuperación de territorios, a los que denominan ecosistemas, mediante reforestación o aforestación. En este punto empiezan a aparecer las inconsistencias y objeciones. Primero, porque al hacer referencia a ‘ecosistemas’ se omite la referencia al territorio, que es lo que realmente se está impactando, e incluye no solo los elementos de un ‘ecosistema’: agua, suelo, vegetación y animales, principalmente; sino que comprende las poblaciones humanas, sus relaciones y, culturas, entre otros.

En segunda instancia, aseveran, a priori, que van a restaurar tierras degradadas por la ganadería extensiva o la agricultura. Para ello prometen establecer ‘bosques plantados’, en sabanas degradadas [lo que puede discutirse o controvertirse], la mayor parte de ellas ubicadas al sur del río Meta, en la altillanura. Se objeta, porque la sabana hace parte de la diversidad de territorios terrestres del planeta, no todos ellos están cubiertos de árboles, la presencia de suelos cubiertos por gramíneas no significa que estén degradados.

“Claramente la sabana de la Altillanura no ha sido despojada de bosques recientemente, por el contrario, las sabanas de la Orinoquia han estado dominadas por pastos durante los últimos 18000 años, o más”, como explica Sergio Estrada. (8) Aforestar o reforestar las sabanas provoca múltiples consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de proyectos consisten en monocultivos de especies exóticas como pinos, eucaliptos o acacias. (9)

Algunos impactos ecológicos de los monocultivos de árboles en la altillanura

De cualquier modo, plantaciones no son bosques, y sea por la vía de la reforestación o la aforestación, se está propiciando la pérdida de biodiversidad de especies que pierden su hábitat o que son reemplazadas por aquellas introducidas. Al transformar la sabana, grandes mamíferos, como el oso palmero u hormiguero, que depende de termitas y hormigas huyen buscando otros lugares para poderse alimentar. Las alteraciones son múltiples e inimaginables, por ejemplo, las especies de árboles exóticos no producen frutos carnosos que puedan alimentar a la fauna local; solo algunos loros consumen los frutos de la acacia (*Acacia mangium*), lo que genera otro desequilibrio, pues esto ayuda a la dispersión de este árbol, altamente invasor, en sitios lejanos de donde fue plantado. (10)

De otro lado, varios de los proyectos hablan de recuperar tierras degradadas, pero han establecido plantaciones en medio de áreas destacadas por su buen estado de protección, como en el caso de

la cuenca del río Bitá, el cual mantiene cerca del 95 por ciento de su cobertura natural. (11) En sus inmediaciones se encuentra, por ejemplo, parte de las plantaciones del proyecto brújula verde, propiedad de la corporación Trafigura, uno de los mayores comerciantes mundiales de combustibles fósiles. La empresa ha invertido más de 1.000 millones de dólares, mediante una de sus filiales, Impala, para adecuar la infraestructura para el transporte de petróleo por el río Magdalena en Colombia. (12)

El proyecto brújula verde (la mayoría de cuyas plantaciones se ubican en la zona resaltada en azul de la figura 1) está a cargo de Inverbosques, que a 2024 había plantado 10.000 hectáreas, 90 por ciento de ellas con eucalipto en Vichada. La gerente de la empresa defiende la decisión de plantar eucalipto, argumentando un motivo económico. Afirma que esa especie permite una captura acelerada de créditos de carbono para financiar el proyecto, y, “eventualmente” plantar especies nativas, que crecen muy despacio y es difícil hacerlas eficientes en términos económicos y financieros. (13)

Una proporción significativa de todas estas plantaciones se están estableciendo, o establecerán, justamente sobre los suelos más fértiles de la altillanura, al estar ubicados a orillas del río Meta, lo que hace que reciban aguas provenientes de la cordillera oriental, con alto contenido de nutrientes.

Entonces, se propone transformar territorios en buen estado de protección con monocultivos de árboles. Sin embargo, aún más alarmantes que las consecuencias descritas anteriormente son los impactos sobre las comunidades y pueblos indígenas.

Violencia y despojo en el establecimiento de plantaciones en la Orinoquia

La Orinoquia ya cuenta con una vasta extensión de monocultivos, no solo de árboles, sino de palma aceitera, maíz, soya y caña de azúcar, entre otros. Las plantaciones para carbono, también tienen antecedentes, como el proyecto Gaviotas 2, que pretende plantar 6.3 millones de hectáreas destinadas a la producción de agrocombustibles y como sumideros de carbono. (14)

Diversas fuentes documentan la práctica sistemática de despojo y desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas, cuyos territorios son destinados en muchas ocasiones al establecimiento de plantaciones, especialmente en lo que va transcurrido del siglo XXI. El Estado Colombiano ha tenido participación y responsabilidad en diferentes formas, ya sea por omisión, por propiciar la impunidad o por prácticas sistemáticas como no atender las solicitudes de reconocimiento del territorio por parte de pueblos indígenas, cuya existencia, en algunos casos, se llega a desconocer. Paralelamente, el territorio es titulado a colonos o particulares, que luego venden a empresas que establecen monocultivos de palma, especies madereras u otras. (15)

Los pueblos indígenas de la región han sido diezmados, con prácticas que llegan incluso a su cacería, mediante lo que se conoce como las Guahibiadas (16), de las cuales se tiene reporte hasta el año 2005, en límites de Puerto Gaitán (Meta) y Vichada. Por ello, cualquier intervención que desplace o ponga en riesgo el territorio en el cual habitan estos pueblos, representa un impacto severo para su pervivencia.

Solo en el departamento de Vichada, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI), identificaban para el año 2009, 41 casos de comunidades en alto riesgo de desplazamiento y expropiación territorial. Las etnias afectadas eran Sikuaní, Mayerris, Kuivas, Amorúa, Sáliva y Piapoco. Para ese entonces, siete casos correspondían al desplazamiento violento, con quema de los caseríos, o intención de hacerlo, para el establecimiento de plantaciones de caucho o para agrocombustibles. Dos empresas son relacionadas a estos hechos: Hercaucho y Llano Caucho. (17)

En síntesis, el establecimiento de plantaciones en la Orinoquia ha estado vinculado a prácticas de despojo, violencia y desplazamiento, que implican la pérdida de territorios de pueblos indígenas.

Con el estímulo proveniente de los mercados de carbono, el establecimiento de nuevos monocultivos tiende entonces a exacerbar la gravísima situación de derechos de los pueblos y comunidades locales. También incrementará la presión y demanda por tierras, generando más conflictos. Es importante alertar sobre esta situación, para tomar medidas que eviten la repetición de un patrón ya identificado en el establecimiento de plantaciones en la región.

Todo esto sucede en un contexto en el que tanto la población local como los pueblos indígenas, desconocen casi por completo ese nuevo negocio del carbono y sus implicaciones, y por tanto la organización y capacidad de respuesta es baja.

Mientras tanto, las plantaciones para el mercado de carbono están aumentando en la Orinoquia, bajo el argumento absurdo de la restauración. Por el contrario, estos monocultivos están ocasionando diversos impactos sobre la región y sus habitantes, representando la continuidad de un sistema injusto de arrebato del territorio, que se perpetúa mediante la violencia y la explotación.

Secretariado del WRM

(1) Universidad Nacional de Colombia - ODDR. 2013. Caracterización región de la Orinoquia. Bogotá D.C.

(2) El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; creada en el marco del acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC -EP, en su capítulo Orinoquia ofrece detalles de la condición de violencia y violación de derechos en esa región, [aquí](#).

(3) Esta publicación del WRM en 2024 muestra dónde y cómo se están expandiendo este tipo de plantaciones, a quiénes beneficia y cómo impacta a las comunidades: “Plantaciones de árboles para el

- mercado de carbono: ¿por qué, cómo y dónde se expanden?”. Disponible [aquí](#).
- (4) Para más información sobre qué son los créditos de carbono y quién se beneficia de su comercio, consulte el artículo [“El negocio del carbono, la tierra y los árboles”](#)
- (5) Esta publicación del WRM en 2024 muestra dónde y cómo se están expandiendo este tipo de plantaciones, a quiénes beneficia y cómo impacta a las comunidades: “Plantaciones de árboles para el mercado de carbono: ¿por qué, cómo y dónde se expanden?”. Disponible [aquí](#).
- (6) Amigos de la Tierra Internacional. 2023. Banco de evidencia sobre las falsas soluciones climáticas. Sus impactos sobre los pueblos y el planeta. Disponible [aquí](#).
- (7) Datos provenientes de los registros de las certificadoras Verra Verified Carbon Standard, Cercarbono, Biocarbon and Gold Standard, obtenidos en enero de 2025.
- (8) Estrada, V. S. 2024. Evitemos una tragedia ecológica en las sabanas del Vichada. Revista Nova et Vetera. Volumen 10, Numero 92.
- (9) Para ampliar la información sobre los problemas ocasionados por las plantaciones industriales de árboles, se recomienda la publicación “¿Qué hay de malo en plantar árboles? El nuevo impulso para expandir las plantaciones industriales de árboles en el Sur Global”. Disponible [aquí](#).
- (10) Estrada, V. S. 2024. Evitemos una tragedia ecológica en las sabanas del Vichada. Revista Nova et Vetera. Volumen 10, Numero 92
- (11) Mongabay. 2018. El río Bitá se convierte en el undécimo humedal Ramsar de Colombia. Disponible [aquí](#).
- (12) Mongabay. 2024. Experts question benefits of Colombian forestation project led by top oil trader. Disponible en [aquí](#).
- (13) Idem.
- (14) Bohórquez, D. A; Garcés, A.D; Ayala, R. S. 2012. Análisis de conflictos de la región Orinoquía en relación con proyectos energéticos: 2000-2010. Investigaciones en construcción, Número 27, pg 87-152.
- (15) ONIC. 2009. Introducción de la situación de violación de derechos humanos en Vichada.
- (16) Comisión de la Verdad. “Afectaciones históricas, continuum de violencias: Guahibíadas”. Disponible [aquí](#).
- (17) ONIC. 2009. Situación territorial de los pueblos indígenas del Vichada.

Tailandia: ¡Las grandes centrales hidroeléctricas no son energía limpia! Las comunidades en lucha contra las represas intercambian experiencias y emiten una declaración conjunta

Una nueva ola de expansión de represas hidroeléctricas avanza por el Sur Global bajo el argumento de producir 'energía limpia', acelerar la 'transición energética' y promover una 'economía baja en carbono'. El 14 de marzo, comunidades difundieron una declaración conjunta en la que denuncian las consecuencias de la destrucción que las grandes represas ya producen en el mundo entero, y rechazan la construcción de más represas, mientras afirman enérgicamente: ¡las grandes centrales hidroeléctricas no son energía limpia!

En los últimos 30 años se han construido cerca de 15 megarepresas hidroeléctricas en el río Mekong, tanto aguas arriba, en territorio chino, como aguas abajo, en Laos, lo que ha provocado muerte y destrucción en uno de los mayores ríos del mundo, del cual depende millones de personas para sobrevivir. Actualmente está prevista la construcción de ocho nuevas presas en este mismo río. Uno de esos proyectos, considerado uno de los más destructivos, es el de la central hidroeléctrica de Phou Ngoy, en Laos. Las comunidades ribereñas de los ríos Mekong y Mun, que luchan contra la instalación de esta nueva central, advierten de que su construcción, en paralelo con otros proyectos de represas, supondría la muerte definitiva del río Mekong.

El gobierno de Indonesia, a su vez, está decidido a impulsar la construcción de megarepresas hidroeléctricas en los próximos años bajo el lema de la 'transición verde'. Al norte de la isla de Kalimantan, en el río Mentarang, ya está en marcha la construcción de una megarepresa, la más grande de Indonesia, que amenaza directamente la supervivencia de cerca de 10 comunidades indígenas Punan, además de otras 20 que se verán afectadas de forma indirecta. La electricidad generada por esta central se destinaría a otros dos megaproyectos 'verdes': un parque industrial llamado KIPI, situado en la costa, y la nueva capital 'verde' de Indonesia, cuyos impactos son igualmente devastadores (1). Además, en otras islas del archipiélago se prevén otros megaproyectos hidroeléctricos igualmente destructivos, como en Papúa, con grandes proyectos de construcción de represas en los ríos Mamberano, Warsamson y Muyu.

La experiencia de lucha y resistencia de las comunidades de la región del Mekong animó a las comunidades Punan de Indonesia a visitarlas para intercambiar experiencias. Este encuentro se celebró en febrero de 2025, durante cuatro días, y fue un momento de profundo intercambio entre activistas seguros de que, a pesar de todas las diferencias, no hay otro camino sino avanzar colectivamente para enfrentar la nueva ola de hidroeléctricas que ya está en marcha en la región.

Con motivo del 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, las comunidades reunidas emitieron la declaración que se presenta a continuación, en la que reafirman la importancia y el compromiso de la lucha conjunta, y declaran que: “nos mantenemos unidos, determinados en nuestra lucha colectiva para defender nuestros ríos, bosques y nuestros futuros de las falsas soluciones verdes y la codicia corporativa”.

Lee la declaración a continuación y haz clic [aquí](#) para firmarla:

(1) Para más información sobre KIPI y los devastadores efectos de la nueva capital de Indonesia consulta los Boletines 268 y 264 del WRM, respectivamente, disponibles en [WRM](#).

**Declaración Conjunta
De comunidades que resisten a los grandes proyectos hidroeléctricos
en el Sudeste Asiático, América Latina y el mundo**

Esta es una declaración de representantes de comunidades del río Mekong en Tailandia, del río Mentarang en Indonesia y de América Latina, quienes se reunieron en Tailandia en febrero de 2025 para intercambiar experiencias y fortalecer sus luchas contra los destructivos proyectos de represas. Estas luchas no existen de manera aislada; representan y se mantienen junto a decenas de otras luchas que resisten los proyectos y planes de represas a gran escala a lo largo de los ríos de la región del Mekong, desde China hasta Vietnam; a través de Indonesia, desde Papúa hasta Sumatra; por toda América Latina; y en muchas otras partes del mundo.

En este Día Internacional de Acción contra las Represas, nosotros, los Pueblos Indígenas y las comunidades de base cuya supervivencia depende de nuestros ríos, nos unimos para rechazar la falsa afirmación de que las grandes represas hidroeléctricas son energía limpia.

Durante décadas, nuestras tierras, aguas y formas de vida han sido sacrificadas bajo la bandera del llamado desarrollo. Las promesas vacías de empleos, prosperidad y energía limpia han resultado, en cambio, en hogares inundados, medios de vida destruidos, pesquerías colapsadas y devastación ambiental irreversible.

A medida que la crisis climática se utiliza como arma para acelerar el impulso global hacia la energía renovable, reafirmamos, con total claridad y convicción:

Las grandes represas hidroeléctricas no son energía limpia. Son motores de violencia, desplazamiento y destrucción.

Los gobiernos, las corporaciones y las instituciones financieras continúan imponiendo proyectos destructivos de represas en el sudeste asiático continental, desde el Mekong hasta el Mentarang, así como en otros ríos vitales de América Latina y en todo el mundo. Estos proyectos se comercializan fraudulentamente como energía verde, incluso cuando arrasan con ríos, bosques y comunidades indígenas. Detrás de estas represas se encuentran poderosos esquemas de comercio de energía centralizados, como la Red de Energía de la ASEAN, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y los Proyectos Estratégicos Nacionales de Indonesia, todos generando ganancias para las empresas a expensas directas de las comunidades y los ecosistemas.

Las amenazas se extienden mucho más allá de las represas hidroeléctricas. A través de las regiones, otros tipos de represas, las represas de desechos mineros impulsadas por la implacable extracción de minerales para la llamada economía baja en carbono, ponen en peligro a las comunidades cercanas con graves riesgos, como lo demostraron trágicamente los colapsos de las represas de Mariana y Brumadinho en Brasil. Al mismo tiempo, las represas de riego construidas

para servir a grandes proyectos agroindustriales están causando graves daños ambientales y sociales, mientras profundizan aún más la crisis hídrica.

Nosotros, comunidades unidas a lo largo del sudeste asiático, América Latina y todo el mundo, exigimos:

1. El fin inmediato del financiamiento y la compra de energía proveniente de represas destructivas.
2. El rechazo de todos los proyectos de represas a gran escala que devastan los ríos, fuerzan el desplazamiento de las comunidades y aceleran la crisis climática.
3. Una transición energética genuina liderada por la comunidad, basada en los derechos de las comunidades y fundamentada en la restauración ecológica, no en mega-proyectos corporativos.

Nos mantenemos unidos, determinados en nuestra lucha colectiva para defender nuestros ríos, bosques y nuestros futuros de las falsas soluciones verdes y la codicia corporativa.

14 de marzo de 2025

FIRMA EN SOLIDARIDAD

(Fecha límite: 31 de mayo)

1. Gerakan Selamatkan hutan, tanah dan Manusia Malamoi (Tolak Bendungan Warsamson) — Save Forest, land and Malamoi people movement (Against Warsamson River Dam), Indonesia
2. Hug Chaingkhon Community group, Thailand
3. Hug Mekong Association, Thailand
4. Komunitas Masyarakat Hukum Adat suku Muyu (Tolak Bendungan kali Muyu) — Indigenous People Muyu Tribe Community (Against Muyu River Dam), Indonesia
5. Living River Association, Thailand
6. MAB (Movement of People Affected by Dams in Brazil)
7. MAR (Movement of People Affected by Dams), Latin America
8. Northeastern Mekong River Protection Network, Thailand
9. Northeastern Network for Natural Resources and Environment, Thailand
10. People's Network to Protect the Mekong River, Thailand
11. Punan Sekalak Community, Mentarang-Tubu River, North Kalimantan, Indonesia
12. Thai Mekong People in 8 Provinces
13. Southern Peasants' Federation of Thailand (SPFT)
14. Tamui Community-Based School, Thailand
15. Lao Highlander Network

16. Mekong Community Institute Association (MCI), Thailand
17. Ubon Monitoring Group on Flood and Mekong Dams (UMFD)
18. Earthrights international. Mekong
19. ETOs Watch Coalition
20. Focus on the Global South (FOCUS)
21. Human Rights and Environment Association, Thailand
22. Just Energy Transition in Thailand (JET in Thailand)
23. Land Watch Thai
24. Laos Dam Investment Monitor (LDIM)
25. Mekong Energy and Ecology Network (MEENet)
26. Nature care, Thailand
27. NUGAL Institute for Social and Ecological Studies, Indonesia
28. Project SEVANA South-East Asia
29. School of Democratic Economics, Indonesia
30. The Association of Northeast Thailand Community Network in 7 Provinces along the Mekong Basin (ComNetMekong)
31. The Mekong Butterfly, Thailand
32. Towards Organic Asia (TOA)
33. World Rainforest Movement (WRM)

Declaración de Solidaritas Merauke, un llamado de emergencia desde Papúa: detener el Proyecto Estratégico Nacional de Merauke

La “Deklarasi Solidaritas Merauke” (Declaración de Solidaritas Merauke, ver más adelante) fue redactada colectivamente por participantes de la “Konsolidasi Solidaritas Merauke” (Reunión de consolidación de Solidaritas Merauke), un encuentro popular que se llevó a cabo en la ciudad de Merauke, provincia de Papúa Meridional, en marzo de 2025. La declaración exige la suspensión inmediata del Proyecto Estratégico Nacional (PSN) de Merauke.

En 2023, el entonces presidente Jokowi designó a Merauke, Papúa Meridional, como la zona elegida para instalar otro Proyecto Estratégico Nacional (PSN). Ese programa de producción de alimentos y energía abarca 2 millones de hectáreas y se centra en plantaciones de arroz y caña de azúcar, esta última con el objetivo de producir azúcar y bioetanol. De llevarse a cabo en su totalidad, podría convertirse en el mayor proyecto de deforestación del mundo y afectaría directamente a una población indígena de 40.000 personas. (1)

En la reunión participaron 256 personas provenientes no sólo de Merauke, sino de aldeas de todo Papúa, así como docenas de otras islas como Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, y Sumatra. Lo que las une es la oposición a la política colonial y social y ecológicamente perjudicial del Gobierno Central de Yakarta, denominada Proyecto Estratégico Nacional (PSN). Actualmente hay cerca de 200 proyectos y programas de gran escala en todo el archipiélago que han sido reconocidos como PSN.

Indonesia ha ratificado varios protocolos de derechos humanos, inclusive los diseñados para proteger a los Pueblos Indígenas. Sin embargo, cada decisión del gobierno de establecer otro PSN se ha llevado a cabo sin ningún tipo de consulta pública, lo cual es profundamente antidemocrático. Además, cuando el gobierno autoriza una inversión para un PSN, las comunidades dentro y alrededor de su emplazamiento tienen que cumplir con estrictos protocolos de seguridad. Cada vez que una comunidad decide rechazar un PSN, lo más probable es que enfrente intimidación, criminalización o incluso algo peor.

Merauke fue elegida como sede del gran encuentro popular debido a la manera peculiar en que se está llevando a cabo el PSN en esta región. Desde el comienzo, el proyecto ha sido visiblemente militarista (2) y se estableció para beneficiar a las oligarquías. En 2024, el Ejército inauguró obras para el establecimiento de cinco nuevos batallones en zonas “propensas al conflicto” en todo Papúa, dos de los cuales se instalarían en Merauke. Irónicamente, si bien la prioridad más importante del nuevo gobierno de Prabowo es proporcionar alimentos gratuitos a toda la población escolar indonesia, el PSN de Merauke está destruyendo actualmente la soberanía alimentaria de miles de habitantes de Papúa.

Al PSN de Merauke lo precede un PSN similar, el “Proyecto Integrado de Alimentación y Energía de Merauke” (MIFEE), inaugurado en 2010. Los aprendizajes que dejó este programa demuestran

que dio lugar a “acaparamientos, adquisiciones y concentración de tierras en manos de unos pocos propietarios de capital, explotación laboral, deforestación, sequías y catástrofes ecológicas recurrentes y generalizadas, desnutrición y escasez de alimentos, corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos cuyas víctimas son los Pueblos Indígenas y la población que vive cerca del proyecto”. (3)

Ver a continuación el texto completo de la declaración, también disponible [aquí](#).

Declaración de Solidaritas Merauke

La presente declaración es el resultado de nuestro trabajo colectivo como Movimiento Solidaritas Merauke. Es el resultado del intercambio de historias sobre nuestro sufrimiento y trauma colectivo provocado por delitos estatales-empresariales, especialmente en nombre de los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN), que ocupan y nos despojan de nuestros espacios de vida y profanan lo que consideramos sagrado.

La destrucción y extinción de nuestras vidas, conocimientos y espiritualidad indígenas continúa en aumento. Estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra memoria histórica de quiénes somos, nuestros lugares sagrados, nuestro arraigo y vínculo estrecho con la tierra y la naturaleza. Estamos perdiendo nuestras fuentes de alimentos, nuestras fuentes de medicina, nuestras fuentes de sustento y la independencia laboral. Además, sufrimos discriminación, trabajos forzados, violencia física, intimidación y criminalización. Esta catástrofe debería considerarse una emergencia por el bien del pueblo.

Es claro que el sufrimiento y catástrofe que vivimos actualmente son un reflejo del colonialismo encubierto mediante un entramado de leyes y reglamentaciones. Es una ironía que ante el robo del patrimonio de la población, la coerción y uso de la fuerza de la ley y el poderío político, económico y militar, las falsas promesas de prosperidad, la destrucción de cuerpos humanos y la explotación de seres humanos, la gente supuestamente deba consolarse con un programa de “alimentos nutritivos gratuitos”.

Desde Solidaritas Merauke declaramos nuestro repudio total al plan que acapara la riqueza de los pueblos a través de reformas políticas. Exigimos que se abandone por completo el Proyecto Estratégico Nacional (PSN) y otros proyectos denominados de interés nacional, que claramente victimizan a los pueblos. Los responsables de delitos estatales-empresariales deben devolver toda la prosperidad robada a los pueblos y restaurar inmediatamente la salud y el espacio de vida de la población en todas las zonas sacrificadas en nombre del interés nacional.

Ninguna isla es demasiado grande ni pequeña para que se destruyan sus paisajes. Si se subestiman estas señales evidentes de catástrofe, definitivamente seremos testigo de una aceleración sin precedentes del caos socio-ecológico de las islas, desde Papúa a Sumatra.

Sata Kekuatan! Satu Perlawanan! Rawat Kehidupan! (¡Un poder! ¡Una lucha! ¡Cuidar la vida!)

Merauke, 14 de marzo de 2025

(1) Informe de Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, actualizado en septiembre de 2024: “The National Strategic Project (PSN) of Food and Energy Development in Merauke Regency, South Papua Province: Violating Human Rights and Worsening Environmental Crisis”, disponible [aquí](#).

(2) Breve video de "The Gecko Project", de marzo de 2025, "Militarised deforestation in Papua: how Indonesia is converting indigenous forest into farms", disponible en [YouTube](#).

(3) Ídem 1.

DE LOS ARCHIVOS DEL BOLETÍN DEL WRM

Para releer: Mega plantaciones de pino en la Patagonia argentina: invasión de tierras, incendios y escasez de agua

En los primeros meses de 2025, incendios forestales volvieron a afectar a cientos de familias y quemar decenas de miles de hectáreas en la Patagonia argentina. En este contexto, compartimos un artículo de Aguayala publicado en el boletín 259 del WRM, que explica cómo las plantaciones industriales de pinos vienen siendo una de las principales causas no sólo de incendios forestales mortales, sino también de acaparamiento de tierras, deforestación, agotamiento del agua y violentos conflictos con las comunidades mapuches. Al mismo tiempo, dichas plantaciones han sido falsamente promovidas como una solución al cambio climático. Acceda al artículo [aquí](#).

RECOMENDADOS

“El peor fondo de conservación de todos los tiempos”

En 2023, paralelamente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) realizada en Dubai, en el Estado petrolero de Emiratos Árabes Unidos, el gobierno brasileño presentó la propuesta de un “Fondo de Bosques Tropicales para Siempre” (Tropical Forests Forever Facility -TFFF). Ideado inicialmente por el Banco Mundial en 2018, se prepara su lanzamiento para la COP30, que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém, Brasil. Las inversiones y donaciones del sector privado y público proporcionarían el capital inicial para que los gestores financieros especulen en los mercados de capitales. Si tras el pago de dividendos a los inversores del TFFF, quedara dinero sobrante de las apuestas financieras, este se dividiría entre los países del Sur global para financiar iniciativas de protección de bosques. En marzo de 2025, la Fundación Solón de Bolivia publicó una crítica del TFFF. Esta crítica refleja las principales deficiencias identificadas por el grupo de expertos Observatorio de Finanzas Verdes (Green Finance Observatory): (1) la inversión está estructurada a favor de los países ricos y los inversores; (2) la financiación para la conservación de los bosques tropicales está condicionada a la inversión en los mercados bursátiles; y (3) el TFFF podría ser utilizado por los países ricos para eludir las solicitudes de financiación para la conservación del Sur global.

El Fondo de Bosques Tropicales para Siempre: [“El peor fondo de conservación de la historia”, escribe el portal REDD Monitor.](#)

Fundación Solón. TFFF: [Una falsa solución para los bosques tropicales.](#)

Green Finance Observatory: [The many questions raised by the Tropical Forests Forever Facility.](#)

Las comunidades indígenas Marudi se oponen al proyecto de carbono de una empresa maderera en Sarawak (Malasia)

Samling es una empresa de explotación de madera, de plantaciones y de construcción muy destructiva en Malasia, a la cual los pueblos indígenas, como los Penan (ver, por ejemplo, el Boletín 100 del WRM) y los Kenyah, llevan décadas oponiéndose por destruir sus tierras ancestrales. (1) En diciembre de 2023, SaraCarbon, filial de Samling, solicitó el registro de un proyecto de carbono en el estado malasio de Sarawak a Verra, una ‘certificadora’ de proyectos de carbono (2). El proyecto del carbono se basa en la dudosa afirmación de que, debido a la destrucción de los bosques pantanosos, la empresa plantaría acacias en un área de más de 30.000 hectáreas. Sin embargo, los habitantes denuncian que ya se ha demostrado que la tierra de esa localidad no es adecuada para las plantaciones de acacias. Por tanto, SaraCarbon estaría reclamando créditos de carbono por proteger bosques que en realidad no tendría intención plausible de destruir.

En febrero de 2025, los habitantes de la zona protestaron con pancartas en las que denunciaban que el proyecto de carbono de Samling vulnera sus Derechos Territoriales Nativos (DNT). (3) “La comunidad cree que este proyecto de créditos de carbono no beneficia a los pueblos indígenas, no resuelve los problemas del cambio climático, sino que representa una invasión de las tierras DNT”, escribe el Sarawak Report. (4)

(1) Mongabay. 2021. [Amenaza de acciones legales contra indígenas de Borneo que protestan contra una empresa maderera.](#)

(2) Registro de carbono Verra. [Proyecto de Conservación y Restauración del Bosque de Marudi.](#)

(3) REDD-Monitor. 2025. [Las comunidades indígenas Marudi se oponen al proyecto de carbono Samling en Sarawak, Malasia.](#)

(4) Informe Sarawak. 2025. [Los habitantes de Marudi protestan contra el proyecto de créditos de carbono “SaraCarbon”, de Samling.](#)

Camerún: la lucha por sus tierras ancestrales continúa

Comunidades en la región de Apouh à Ngog en Édéa Cameroon continúan resistiendo la violencia de la empresa Socapalm (subsidiaria de SOCFIN), y de militares armados hasta los dientes que pretenden prohibir a la comunidad la recuperación de un pedazo de sus tierras ancestrales, para cultivar alimentos, luego de años de ocupación por parte de plantaciones industriales de palma.

La opinión internacional y nacional debe estar atenta y tener un ojo sobre esta situación, para eso compartimos un artículo que describe lo que está sucediendo y en el cuál se pueden ver fotos que ejemplifican la violencia y la impunidad con la que estás empresas actúan.

Estamos vigilantes, nuestra solidaridad a la comunidad de Apouh à Ngog!

Lea el artículo de [Mongabay](#).

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos con la siguiente fuente:

Boletín 274 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): “Tácticas sucias detrás de los negocios ‘verdes” (<https://wrm.org.uy/es/>)

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

*El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos
en la defensa de sus territorios y bosques.
La suscripción es gratuita.*

**¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
"Gobiernos y ONGs al servicio de intereses corporativos: impactos y luchas de resistencia"
Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link**

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Secretariado internacional del WRM

Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy

<http://wrm.org.uy/es>